

VOTO PARTICULAR DEL COMISIONADO JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ EN EL RECURSO DE REVISIÓN 0944/INFOEM/IP/RR/2018.

Resumen del voto: Los pronunciamientos simples que realicen los Sujetos Obligados, deben estar debidamente motivados, debiendo explicar de manera clara y precisa las causas por las que no se cuenta con la información requerida, a efecto de brindar certeza jurídica de la omisión a la entrega de la información por no poseer, generar o administrar lo solicitado.

Índice.

I. Consideraciones Generales	1
II. De los requerimientos planteados en el recurso de revisión.	2
III. Del Derecho de Acceso a la información pública y el deber de motivar.	7
IV. Del Pronunciamiento simple	12
V. Conclusión.	19

I. Consideraciones Generales

Me concurrido con mi voto particular de la presente resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en su Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el día treinta (30) de mayo del dos mil dieciocho, en el recurso

de revisión interpuesto por [REDACTED] en contra de la respuesta del Ayuntamiento de Valle de Bravo, procedimiento que le fue asignado el número de expediente 0944/INFOEM/IP/RR/2018.

2. La resolución puntualmente determina **ORDENAR** el recurso de revisión, tomando en consideración la falta de respuesta del Sujeto Obligado.

3. Estando de acuerdo con la resolución formulada por el comisionado ponente, mi voto particular se deriva del simple pronunciamiento que el **SUJETO OBLIGADO** realizó al momento de emitir la respuesta a la solicitud de información.

4. Por tal motivo y en términos de lo señalado por el artículo 14 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios formuló el presente voto particular.

II. De los requerimientos planteados en el recurso de revisión.

En ejercicio del derecho constitucional que le asiste al particular, formuló una solicitud de información dirigida hacia el Ayuntamiento de Valle de Bravo, en dicha solicitud planteó lo siguiente "1.- Reglamento de Imagen Urbana vigente a partir del 1º de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 2.- Manual de Organización vigente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 3.- Manual de Procedimientos vigente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 4.- Tabulador

vigente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 5.- Catálogo de Monumentos Históricos en Valle de Bravo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 6.- Catálogo municipal de construcciones de arquitectura vernácula, de monumentos estéticos edificados en el siglo XX que constituyen ejemplos únicos, generadores de un estilo o por ser las mejores muestras de corrientes arquitectónicas en Valle de Bravo. 7.- Relación completa de las licencias de USO DE SUELO otorgadas por las autoridades municipales desde el 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 8.- Relación completa de las modificaciones al USO DE SUELO Y DENSIDADES otorgadas por las autoridades municipales desde el 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 9.- Relación completa de todas las obras suspendidas, revocadas o demolidas de manera parcial o total por las autoridades municipales, de las multas aplicadas y de los recursos obtenidos por estos conceptos del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 10.- Relación completa y copia de todos los DICTÁMENES PREVIOS elaborados por la Jefatura de Imagen Urbana de la Subdirección de Desarrollo Urbano. 11.- Relación completa y copia de todos los DICTÁMENES de Imagen Urbana elaborados por el Consejo Técnico establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Valle de Bravo para la emisión de licencias y permisos de construcción del día 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 12.- Relación completa y copia de todas las opiniones de los delegados (autoridades auxiliares) en relación a las licencias y permisos de construcción en sus respectivos barrios y comunidades del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 13.- Relación completa de las licencias de construcción otorgadas por las autoridades municipales del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 14.- Relación completa de los permisos de construcción otorgados por las autoridades municipales del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 15.- Nombre del o de los encargados de la Jefatura de Imagen Urbana desde el 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 16.- De conformidad con lo expresado por el presidente municipal en su Primer Informe de Gobierno: proporcionar la relación completa de las construcciones regularizadas por las autoridades municipales; la autorización del Cabildo para llevar a cabo este procedimiento; describir el sustento jurídico y técnico para llevar a cabo este procedimiento; relacionar los ingresos totales del Ayuntamiento por este concepto desde el 1° de

enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 17.- Relación completa de todos los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para permitir obras de construcción (restauración, adecuación o ampliación) de construcciones catalogadas por el propio (INAH) en Valle de Bravo del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 18.- Relación completa de los números oficiales y alineamientos expedidos por las autoridades municipales del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018. 19.- Copias de las licencias de construcción otorgadas por las autoridades municipales para la construcción del "teatro al aire libre o velaría", de la llamada "fuente danzarina" y de la "Plaza Estado de México" construidas por las autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Comisaría Municipal en proceso de construcción, por parte de las autoridades municipales. 20.- Nombre y cargo de las personas que conforman el Consejo Técnico (TÍTULO OCTAVO DEL DICTAMEN DE IMAGEN URBANA Y DEL CONSEJO TECNICO DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA); proporcionar el Reglamento Interno del Consejo Técnico; proporcionar copia de las minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Técnico a partir del 1° de enero del 2016 al 25 de febrero del 2018.." (sic)

5. Bajo esas consideraciones la Ponencia que resuelve el recurso de revisión para no realizar una afectación al derecho de acceso a la información del particular, decidió por cuenta propia entrar al estudio y análisis del asunto a efecto de verificar si existe fuente obligacional por parte del Ayuntamiento de Valle de Bravo, y así ordenar que se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**.

6. Por lo que respecta al análisis que realizó el ponente ante la falta de respuesta del **SUJETO OBLIGADO** se observa que no colmó la solicitud de información por

parte del solicitante, por lo que se **ORDENA** al Ayuntamiento de Valle de Bravo haga entrega vía **SAIMEX** en versión pública y previa búsqueda exhaustiva y razonable, de lo siguiente:

- a) El manual de organización y el Manual de Procedimientos vigentes ~~ambos~~ de la Dirección de desarrollo Urbano y Obras Públicas.
 - b) El tabulador de sueldos del que se desprendan las plazas o ~~puestos~~ de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas actualizado al 27 de febrero de 2018.
 - c) Las licencias de uso de suelo, las modificaciones al uso de suelo y densidad, las licencias de construcción, los permisos de construcción y las regularizaciones de construcciones expedidas del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.
 - d) El acta de la sesión de cabildo de fecha 16 de noviembre de 2016.
 - e) El documento que contenga el sustento jurídico y técnico para llevar a cabo las regularizaciones en el municipio.
 - f) Los documentos de los que se pueda desprender todas las obras suspendidas, revocadas o dejadas de manera parcial o total y las multas aplicadas, así como de los recursos obtenidos por dichos conceptos, del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.
 - g) Previa búsqueda exhaustiva y razonable, los dictámenes previos emitidos por la Jefatura de Imagen Urbana y los dictámenes de imagen urbana emitidos por el Consejo Técnico en el periodo del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.
 - h) Las opiniones que hayan elaborado los delegados de Valle de Bravo, respecto de las licencias y permisos de construcción emitidas en sus respectivos barrios y comunidades dentro del periodo correspondiente del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.
- El documento del que se pueda desprender el nombre del titular de la Jefatura de Imagen Urbana.
- j) Las autorizaciones o aprobaciones emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre intervenciones (restauración, adecuación o

ampliación) en inmuebles, en el periodo del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.

k) Las constancias de alineamiento y de número oficial, expedidas del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.

l) Las licencias de construcción del "teatro al aire libre", de la llamada "fuente danzaría" y de la "plaza Estado de México".

m) Los documentos de los que se desprenda el nombre y cargo de las personas que integren el Consejo Técnico en materia de imagen urbana.

n) Las minutas o actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Técnico del 1 de enero de 2016 al 25 de febrero de 2018.

Para lo cual, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen de los soportes documentales objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de la recurrente, mismo que igualmente hará de conocimiento del recurrente.

En caso de que no se localice la información que se ordena en los incisos a), c) (únicamente respecto de la información de los años 2016 y 2017 y de las autorizaciones de modificaciones de uso de suelo), f), j) k) y l) por no haberse generado, bastará con que el Sujeto Obligado se pronuncie en tal sentido.

En el supuesto de no localizar la información referida en el inciso g), el Comité de Transparencia deberá emitir Acuerdo de Inexistencia, en términos de los artículos 49 fracciones II y XIII, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo notificarlo al recurrente al momento de dar cumplimiento a la presente resolución.

7. Sin embargo esta ponencia observó que la resolución puntualmente indica lo siguiente respecto a los incisos a), c), f), j), k) y l):

En caso de que no se localice la información que se ordena en los incisos a), c) (únicamente respecto de la información de los años 2016 y 2017 y de las autorizaciones de modificaciones de uso de suelo), f), j) k) y l) por no haberse generado, bastará con que el Sujeto Obligado se pronuncie en tal sentido.

8. Por esa razón, el ponente se manifestó al respecto enfatizando que en el caso de que el **SUJETO OBLIGADO** no cuente con la información, bastará con que se pronuncie al respecto y lo haga del conocimiento del particular.

9. Por tal motivo el **SUJETO OBLIGADO** en cuestión debe de demostrar que no genera, posee o administra la información que requiere el particular, debiendo motivar su respuesta en función de las causas que hayan generado tales circunstancias.

III. Del Derecho de Acceso a la información pública y el deber de motivar.

10. Resulta necesario establecer que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido a todas las personas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 párrafos 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, 11, 12, 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y, razón por la cual todos los órganos del Estado están obligados no sólo a reconocerlo sino aún más, a salvaguardarlo y en caso de contravención, a este Instituto le corresponde restituirlo.

11. En efecto, el derecho fundamental de acceso a la información pública se desarrolla en varias vertientes:

- Impone al Estado la obligación de protegerlo. Esto es, es suficiente con que una persona realice una solicitud de información para que la autoridad la atienda y entregue lo solicitado, salvo excepciones limitadas.
- Impone la obligación a todos los organismos de transparentar sus acciones como una forma cotidiana de actuar; de garantizar el acceso a la información pública a través de tener disponible en cualquier momento la información sin necesidad de que medie una solicitud del particular.
- Otorga a todos los documentos en posesión de las autoridades la calidad de públicos y únicamente pueden ser reservados temporalmente por razones de interés público y en los términos expresamente señalados en la ley.
- Este derecho se rige por el principio de máxima publicidad, es decir, la información que generan, administren o posean los organismos públicos

son documentos de acceso a cualquier persona y para su restricción debe existir un bien jurídico mayor que proteger.

- Imponer al Legislativo la obligación de crear una ley que establezca los procedimientos para su protección, respeto y difusión.
- Imponer el derecho de una persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno u administraciones públicas.

12. Por tanto, para que los **SUJETOS OBLIGADOS** hagan efectivo el derecho de las personas de buscar, recibir y difundir información pública, información que los **SUJETOS OBLIGADOS** generen, administren o posean, y que deben poner a disposición de los particulares los documentos en los que conste el ejercicio de sus atribuciones legales o que por cualquier circunstancia obren en sus archivos.

13. Es necesario precisar que la transparencia es un principio jurídico que se concreta especialmente en el derecho fundamental de acceder a la información pública y que la aplicación del principio de transparencia y el respeto y garantía del derecho de acceder a la información pública, son elementos indispensables para afirmar que existe un verdadero estado social y democrático de derecho, en el cual todas las personas pueden participar activamente en los asuntos que las afecten y una Administración Pública comprometida con el bienestar general.

14. Por otra parte, tenemos la rendición de cuenta pública; que supone la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones en los distintos niveles de poder, eso permite evitar, prevenir y en su caso, castigar el abuso de poder.

15. Por lo tanto, el principio de la rendición de cuentas y la transparencia encuentran un objetivo en común, buscar conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes, si los gobernantes, funcionarios, representantes y líderes políticos, es decir, todos los que dispongan de algún poder político, saben que puedan ser llamados a cuentas, que su acción política, su desempeño gubernamental y sus decisiones podrán generar efectos positivos o negativos a su interés personal, tendrán mayor diligencia en el momento de ejercer el poder y atenderán, tanto el interés colectivo como la relación de medios y fines en el que hacer gubernamental, precisamente para que el resultado de sus resoluciones no afecte o perjudique el interés general o el particular de sus gobernados y representados.

16. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adopta la *ratio decidendi* en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que en principio es posible acceder a toda información pública, salvo que la ley de manera justificada, proporcionada y razonable establezca alguna restricción a dicho acceso, de modo que las restricciones están limitadas en el tiempo, pues el principio

acogido es el de la máxima publicidad. Obviamente, este acceso se garantiza sin menoscabo de la intimidad de la vida privada y de los datos personales.

17. Por estas razones las leyes de transparencia y acceso a la información en México, tienen como objetivo primordial el garantizar que los ciudadanos puedan solicitar documentos que poseen las instituciones gubernamentales.

18. En efecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, su propósito es transparentar el ejercicio de la función pública, tutelar y garantizar a toda persona, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a sus datos personales, así como a la corrección y supresión de éstos y proteger los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados.

19. Derivado de dicha obligación se impone también la obligación de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información que posean generen o administren de forma completa y actualizada.

20. Bajo la tesitura de lo anteriormente expuesto se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

21. Por lo que si en los puntos resolutivos se está ordenando al **SUJETO OBLIGADO** realizar una búsqueda de la información solicitada en términos del Considerando **CUARTO**, y entregarla al particular ya no cabe la manifestación simple y llana, sino que se deben observar dos puntos importantes:

- Si la posesión de la información es de carácter inexcusable, es decir si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de Transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia.
- O bien pudiera suscitarse el supuesto aplicable al presente asunto, que la facultad sea de carácter potestativo o que su realización dependa de un carácter externo, en ese caso debe señalarse se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.

22. En razón a las consideraciones antes señaladas es que no puedo compartir el sentido de la resolución adoptada, y me permito manifestar lo siguiente en el presente voto particular:

IV. Del Pronunciamiento simple

23. En numerosas ocasiones he mencionado que la fundamentación y motivación es una obligación inherente y fundamental de todas las autoridades independientemente del grado jerárquico con el que cuenten, y en el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa no será la excepción en la que señale este aspecto, para lo cual es importante hacer mención lo que el intérprete judicial del país ha establecido en una jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Revisión fiscal 403/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995.

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguél Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Bañis Muñoz.

24. Así en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

25. Lo anterior a razón de que el Sujeto Obligado se limitó simplemente a manifestar "que no cuenta con la información" tal respuesta es considerada como un pronunciamiento simple; sin embargo, carece de fundamentación y motivación, toda vez que no explica de manera clara y precisa las razones por las que la información no es generada, poseída o administrada y por tanto no obra en los archivos del Sujeto Obligado, lo que en consecuencia contradice en primer lugar el principio de certeza, en razón de que el acto de autoridad que realizó el Secretaría de Finanzas del Estado de México en respuesta a la solicitud carece de fundamentación y motivación, lo que en consecuencia no brinda seguridad y certidumbre jurídica al particular, imposibilitando conocer si la postura adoptada por el Sujeto Obligado es apegada a derecho; y en segundo lugar el artículo 19

segundo párrafo que señala *“En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.”*

26. Por lo que si el Sujeto Obligado no genera, administra o posee la información que solicitó el particular, el mismo deberá fundar y motivar debidamente las razones o circunstancias por las que no genera, posee o administra la información precisando de manera clara, las razones que expliquen las causas por las que no se cuenta con la información requerida en el presente asunto.

27. Para precisar los alcances de la fundamentación y motivación a que están sujetos todos los actos de autoridad, es oportuno remitirnos al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar todo acto que implique una molestia en la esfera de derecho de las personas:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

28. De este precepto se deduce que en el régimen jurídico mexicano, la fundamentación y motivación de los actos o resoluciones no es exclusiva de los órganos judiciales o jurisdiccionales, sino que se extiende a todas las autoridades.
29. En este contexto, en todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.
30. Entonces, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.
31. Han sido vastos los estudios doctrinarios relativos a estos derechos fundamentales y al principio de legalidad en ellos contenidos; como ejemplo, el procesalista José Ovalle Fabela, en su obra "Garantías Constitucionales del Proceso", refiere que "...la garantía de fundamentación impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos de que se trate y que sustenten su competencia, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho. Pero de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión de que esos hechos son ciertos, normalmente a partir

del análisis de las pruebas, lo cual se debe exteriorizar en una argumentación o juicio de hecho....”

32. Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

33. En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

34. Es de mencionar que en caso de que el **SUJETO OBLIGADO**, no contara con la información solicitada por no encontrarse dentro de sus facultades, competencias o funciones, deberá demostrarlo de manera fundada y motivada, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de la materia, el cual establece que:

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que

la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

35. Sirve de sustento el siguiente criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que citando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos

aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

36. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que para los casos en que la información que el particular solicitó sea inexistente de acuerdo con el artículo 20 de la Ley, la autoridad debe informar al particular especificando los elementos que le permitan tener la seguridad de que los criterios de búsqueda fueron exhaustivos, así como señalar detalladamente las circunstancias que generaron la inexistencia de la información, de manera que la autoridad no puede únicamente informar al solicitante sobre la inexistencia de determinada información, sino que debe hacerse todo lo necesario para satisfacer el derecho reclamado por el particular.

37. Tal circunstancia no puede tener como resultado el simple pronunciamiento de la inexistencia de la información solicitada, sino por el contrario, en estos casos las autoridades deberán fundar y motivar las razones por las que no cuentan con la información ya sea porque no realizaron dichos actos o porque no se encuentran en el ámbito de sus atribuciones.

V. Conclusión.

38. Por lo mencionado anteriormente, considero que es de suma importancia que en los casos que el Sujeto Obligado emita un pronunciamiento simple este debe estar debidamente fundado y motivado demostrando las razones o motivos por las que

no genera, posee o administra lo solicitado, de tal manera que el particular tenga certeza jurídica de que en todo momento se está actuando con estricto apego a derecho, de lo contrario este instituto como Órgano Garante contribuiría a la afectación al derecho de acceso a la información de los particulares al consentir tales deficiencias por parte de los Sujetos Obligados.

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ

COMISIONADO

(Rubrica)

JGLH/VMM